

# 25 ANIVERSARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE PUERTO MADRYN

El 22 de junio marcó un hito histórico para nuestra institución, al cumplirse veinticinco años de la conformación del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn y la elección de la primera Comisión Directiva, el primer Tribunal de Disciplina y Revisor de Cuentas, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Colegiación Pública LEY XIII – Nº 11 (Antes Ley 4558), sancionada el 23 de noviembre de 1999.

En esa fecha del año 2000 el acto electoral fue llevado adelante en las instalaciones del Hotel Playa, que se ubicaba en las calles 28 de Julio y Av. Roca, y fue presidido por la Junta Electoral designada para dicha ocasión, representada por la Dra. Lucía Erroz de Mut y el Dr. Carlos Ferrari.

La lista electa, identificada bajo el color azul, estaba conformada de la siguiente forma:

Comisión Directiva 2000-2003

Presidente: Dr. Victorio A. Fassio

Vicepresidente: Dr. Luis A. Novoa

Secretario: Dr. Guillermo Löwy

Tesorero: Dr. Alfredo O. Martín

Primer Vocal Titular: Dr. Eduardo A. Iglesias

Segundo Vocal Titular: Dr. Daniel Gómez Lozano

Tercer Vocal Titular: Dr. Juan Carlos Mamani

Primer vocal Suplente: Dr. Carlos A. La Chiesa

Segundo Vocal Suplente: Dra. Claudia Bocco

Tercer Vocal Suplente: Dr. Tomás M. Rizzoti

Revisor de Cuentas

Revisor Titular: Dr. Juan Eduardo Meani

Revisor Suplente: Dra. Nora Spalletti

Tribunal de Disciplina

Titulares: Dr. Rafael A. Saliva

Dr. José F. Alberdi

Dr. Federico Arnoldi

Suplentes: Dra. María Mercedes Peña de Rocca

Dr. Juan Carlos Anzaldi

Dra. María Lidia Cristóbal

En esta fecha tan trascendental para nuestra institución es un deber el reconocimiento también a quienes vislumbraron la necesidad de colegiar a los abogados de nuestro foro, e hicieron posible este logro a través de su participación en la entidad antecesora la Asociación de Abogados de Puerto Madryn, creada el 28 de mayo 1997.

El Colegio de Abogados de Puerto Madryn se mantiene hoy a la vanguardia en la defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial y en la protección de los derechos de los abogados y abogadas que integran su matrícula. Este presente de compromiso y protagonismo no es casualidad, sino el resultado del camino trazado por quienes, antes que nosotros, supieron marcar con convicción y esfuerzo una huella institucional que hoy continuamos transitando y fortaleciendo. Esa tarea ineludible se proyecta también en la defensa del Estado de Derecho y en la promoción de un acceso real y

efectivo a la justicia para todos los ciudadanos, como pilar fundamental de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos y garantías consagrados por la Constitución.



## 25 ANIVERSARIO DEL COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS DE PUERTO MADRYN

El 22 de junio marcó un hito histórico para nuestra institución, al cumplirse veinticinco años de la conformación del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn y la elección de la primera Comisión Directiva, el primer Tribunal de Disciplina y Revisor de Cuentas, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Colegiación Pública LEY XIII - N° 11 (Antes Ley 4558), sancionada el 23 de noviembre de 1999.

En esa fecha del año 2000 el acto electoral fue llevado adelante en las instalaciones del Hotel Playa, que se ubicaba en las calles 28 de Julio y Av. Roca, y fue presidido por la Junta Electoral designada para dicha ocasión, representada por la Dra. Lucía Erroz de Mut y el Dr. Carlos Ferrari.

La lista electa, identificada bajo el color azul, estaba conformada de la siguiente forma:

### **Comisión Directiva 2000-2003**

Presidente: Dr. Victorio A. Fassio  
Vicepresidente: Dr. Luis A. Novoa  
Secretario: Dr. Guillermo Löwy  
Tesorero: Dr. Alfredo O. Martín  
Primer Vocal Titular: Dr. Eduardo A. Iglesias  
Segundo Vocal Titular: Dr. Daniel Gómez Lozano  
Tercer Vocal Titular: Dr. Juan Carlos Mamani  
Primer vocal Suplente: Dr. Carlos A. La Chiesa  
Segundo Vocal Suplente: Dra. Claudia Bocco  
Tercer Vocal Suplente: Dr. Tomás M. Rizzoti

### **Revisor de Cuentas**

Revisor Titular: Dr. Juan Eduardo Meani  
Revisor Suplente: Dra. Nora Spalletti

### **Tribunal de Disciplina**

Titulares: Dr. Rafael A. Saliva  
Dr. José F. Alberdi  
Dr. Federico Arnoldi  
Suplentes: Dra. María Mercedes Peña de Rocca  
Dr. Juan Carlos Anzaldi  
Dra. María Lidia Cristóbal

En esta fecha tan trascendental para nuestra institución es un deber el reconocimiento también a quienes vislumbraron la necesidad de colegiar a los abogados de nuestro foro, e hicieron posible este logro a través de su participación en la entidad antecesora la Asociación de Abogados de Puerto Madryn, creada el 28 de mayo 1997. El Colegio de Abogados de Puerto Madryn se mantiene hoy a la vanguardia en la defensa irrestricta de la independencia del Poder Judicial y en la protección de los derechos de los abogados y abogadas que integran su matrícula.

Este presente de compromiso y protagonismo no es casualidad, sino el resultado del camino trazado por quienes, antes que nosotros, supieron marcar con convicción y esfuerzo una huella institucional que hoy continuamos transitando y fortaleciendo. Esa tarea ineludible se proyecta también en la defensa del Estado de Derecho y en la promoción de un acceso real y efectivo a la justicia para todos los ciudadanos, como pilar fundamental de una sociedad democrática y respetuosa de los derechos y garantías consagrados por la Constitución.

---

# **JURADO EVALUADOR PARA CUBRIR EL CARGO DE CAMARISTA PENAL DE PUERTO MADRYN. EL DR. DANIEL OBLIGADO DESISTIÓ DE PARTICIPAR COMO JURISTA INVITADO**

Pese a que el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut rechazó formalmente en su sesión extraordinaria del día viernes 13 de Junio la presentación efectuada por el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn -mediante la cual se solicitó la inmediata revocación de la designación del Dr. Daniel Horacio Obligado como jurista invitado en el concurso para cubrir el cargo de Juez de Cámara Penal-, el mencionado magistrado comunicó su decisión de desistir de participar en las evaluaciones previstas para los días 23, 24 y 25 de junio de 2025 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El Colegio de Abogados había fundado su objeción a la designación del Dr. Obligado en la falta de idoneidad técnica, trayectoria académica y solvencia moral requeridas por el Reglamento de Concursos, así como en el modo en que se produjo su incorporación al listado de juristas invitados del Consejo de la Magistratura, la cual había sido promovida por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Raidán, sin el procedimiento de publicidad correspondiente.

Los cuestionamientos planteados por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, a los que se sumaron objeciones de la

Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut, fueron avalados por el representante de los abogados de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Dr. Manuel Burgueño Ibarguren, y la representante de los trabajadores judiciales, Estefanía Alejo, quienes postularon separarlo del concurso para cubrir la vacancia en la Cámara Penal de Puerto Madryn.

La decisión del Dr. Obligado de excusarse por razones de agenda y no integrar el jurado evaluador constituye, en los hechos, una validación de las objeciones planteadas por este Colegio, que continúa bregando por un proceso de selección de magistrados transparente, respetuoso del principio de legalidad y con participación de juristas que reúnan verdaderamente los requisitos exigidos por la normativa vigente.



## **JURADO EVALUADOR PARA CUBRIR EL CARGO DE CAMARISTA PENAL DE PUERTO MADRYN**

### **EL DR. DANIEL OBLIGADO DESISTIÓ DE PARTICIPAR COMO JURISTA INVITADO**

Pese a que el Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut rechazó formalmente en su sesión extraordinaria del día viernes 13 de Junio la presentación efectuada por el Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn -mediante la cual se solicitó la inmediata revocación de la designación del Dr. Daniel Horacio Obligado como jurista invitado en el concurso para cubrir el cargo de Juez de Cámara Penal-, el mencionado magistrado comunicó su decisión de desistir de participar en las evaluaciones previstas para los días 23, 24 y 25 de junio de 2025 en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

El Colegio de Abogados había fundado su objeción a la designación del Dr. Obligado en la falta de idoneidad técnica, trayectoria académica y solvencia moral requeridas por el Reglamento de Concursos, así como en el modo en que se produjo su incorporación al listado de juristas invitados del Consejo de la Magistratura, la cual había sido promovida por el Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Raidán, sin el procedimiento de publicidad correspondiente.

Los cuestionamientos planteados por el Colegio de Abogados de Puerto Madryn, a los que se sumaron objeciones de la Asociación de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut, fueron avalados por el representante de los abogados de la ciudad de Comodoro Rivadavia, Dr. Manuel Burgueño Ibaguren, y la representante de los trabajadores judiciales, Estefanía Alejo, quienes postularon separarlo del concurso para cubrir la vacancia en la Cámara Penal de Puerto Madryn.

La decisión del Dr. Obligado de excusarse por razones de agenda y no integrar el jurado evaluador constituye, en los hechos, una validación de las objeciones planteadas por este Colegio, que continúa bregando por un proceso de selección de magistrados transparente, respetuoso del principio de legalidad y con participación de juristas que reúnan verdaderamente los requisitos exigidos por la normativa vigente.

---

# **JUICIO POLITICO AL SUPERIOR**

# TRIBUNAL DE JUSTICIA, PROCURADOR GENERAL Y DEFENSOR GENERAL

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn respalda la iniciativa de juicio político impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut ante la inédita crisis institucional generada por las decisiones discrecionales de sus órganos de gobierno.

Los integrantes del Superior Tribunal han socavado su credibilidad con medidas como la exención del impuesto a las ganancias a una de sus ministras por su condición de jueza municipal de faltas; la asignación de doce pasajes aéreos gratuitos por año; la duplicación de viáticos –que alcanzan los \$ 320.000 diarios para traslados superiores a 300 km–; la implementación del teletrabajo para todo el personal; la omisión de la fundamentación individual exigida por el artículo 169 de la Constitución provincial; la introducción de la figura de “ministro referente”; la designación de secretarios privados; el otorgamiento de adicionales no remunerativos por “gastos de investidura” que elevan sus ingresos hasta un 60 %; la compra de vehículos de alta gama y el nombramiento de personal sin concurso previo. A esto se suma el trato despectivo a los operadores jurídicos, las contrataciones directas y las remociones arbitrarias, configurando un patrón de opacidad y privilegios incompatible con los principios de ética pública, transparencia, independencia judicial y respeto al orden constitucional.

Este escenario se agrava con el incumplimiento sistemático del deber de responder a los pedidos de acceso a la información pública presentados por este Colegio, y con el silencio institucional persistente frente a los legítimos reclamos de magistrados, trabajadores judiciales y operadores jurídicos.

En tales condiciones, poco puede esperarse de un cuerpo que ha optado por el aislamiento, el secretismo y el privilegio. La autoridad moral para dictar sentencias sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía está profundamente deteriorada.

No estamos sorprendidos ante esta realidad que afecta a todos los chubutenses ya que, cumpliendo con la Ley de colegiación, nos opusimos firmemente a cada una de las propuestas de los diferentes gobernadores para designar a los actuales integrantes del Superior Tribunal de Justicia, advirtiendo la falta de paridad de género, escasos o nulos antecedentes académicos, ausencia de procedencia regional y falta de idoneidad para tan alta investidura.

El descrédito alcanzado por sus actuales integrantes es irreparable. Es por lo que este Colegio considera necesaria una renovación integral, juntamente con el Procurador General y Defensor General como exigencia institucional fundada en la necesidad urgente de restablecer la credibilidad, la funcionalidad y la imparcialidad del Poder Judicial.

Necesitamos una Superior Tribunal que se legitime por sus fallos, integrado por mujeres y hombres con idoneidad, independencia, especialidad y arraigo regional, en paridad de género y con reconocimiento en el ámbito académico y ante la opinión pública. Construir un futuro para nuestra provincia exige, en primer lugar, restablecer el Estado de Derecho, un estricto respeto a la división de poderes, a la independencia judicial y a los derechos y garantías constitucionales.

Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la ética pública y la defensa de los valores republicanos, y nos ponemos a disposición de los órganos competentes para colaborar en todo proceso orientado a recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia provincial.

Puerto Madryn, 12 de junio de 2025



## **JUICIO POLITICO AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA, PROCURADOR GENERAL Y DEFENSOR GENERAL**

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn respalda la iniciativa de juicio político impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionariado Judicial de la Provincia del Chubut ante la inédita crisis institucional generada por las decisiones discrecionales de sus órganos de gobierno.

Los integrantes del Superior Tribunal han socavado su credibilidad con medidas como la exención del impuesto a las ganancias a una de sus ministras por su condición de jueza municipal de faltas; la asignación de doce pasajes aéreos gratuitos por año; la duplicación de viáticos -que alcanzan los \$320.000 diarios para traslados superiores a 300 km-; la implementación del teletrabajo para todo el personal; la omisión de la fundamentación individual exigida por el artículo 169 de la Constitución provincial; la introducción de la figura de “ministro referente”; la designación de secretarios privados; el otorgamiento de adicionales no remunerativos por “gastos de investidura” que elevan sus ingresos hasta un 60 %; la compra de vehículos de alta gama; y el nombramiento de personal sin concurso previo. A esto se suma el trato despectivo a los operadores jurídicos, las contrataciones directas y las remociones arbitrarias, configurando un patrón de opacidad y privilegios incompatible con los principios de ética pública, transparencia, independencia judicial y respeto al orden constitucional.

Este escenario se agrava con el incumplimiento sistemático del deber de responder a los pedidos de acceso a la información pública presentados por este Colegio, y con el silencio institucional persistente frente a los legítimos reclamos de magistrados, trabajadores judiciales y operadores jurídicos.

En tales condiciones, poco puede esperarse de un cuerpo que ha optado por el aislamiento, el secretismo y el privilegio. La autoridad moral para dictar sentencias sobre los derechos fundamentales de la ciudadanía está profundamente deteriorada.

No estamos sorprendidos ante esta realidad que afecta a todos los chubutenses ya que, cumpliendo con la Ley de colegiación, nos opusimos firmemente a cada una de las propuestas de los diferentes gobernadores para designar a los actuales integrantes del Superior Tribunal de Justicia, advirtiendo la falta de paridad de género, escasos o nulos antecedentes académicos, ausencia de procedencia regional y falta de idoneidad para tan alta investidura.

El descrédito alcanzado por sus actuales integrantes es irreparable. Es por lo que este Colegio considera necesaria una renovación integral, juntamente con el Procurador General y Defensor General como exigencia institucional fundada en la necesidad urgente de restablecer la credibilidad, la funcionalidad y la imparcialidad del Poder Judicial.

Necesitamos un Superior Tribunal que se legitime por sus fallos, integrado por mujeres y hombres con idoneidad, independencia, especialidad y arraigo regional, en paridad de género y con reconocimiento en el ámbito académico y ante la opinión pública. Construir un futuro para nuestra provincia exige, en primer lugar, restablecer el Estado de Derecho, un estricto respeto a la división de poderes, a la independencia judicial y a los derechos y garantías constitucionales.

Reafirmamos nuestro compromiso con la legalidad, la ética pública y la defensa de los valores republicanos y nos ponemos a disposición de los órganos competentes para colaborar en todo proceso orientado a recuperar la confianza de la ciudadanía en la justicia provincial.

Puerto Madryn, 12 de junio de 2025

---

# **PRESENTACION ANTE EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA**

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn exige al Presidente del Consejo de la Magistratura de Chubut, Dr. Rafael Lucchelli, la inmediata revocación de la designación del Dr. Daniel Horacio Obligado como jurista invitado en el concurso para Juez de Cámara Penal por falta de idoneidad y solvencia moral.

En la presentación efectuada en el día de hoy, se puso de manifiesto que la subrepticia inclusión en el listado de juristas del Consejo de la Magistratura, que habría ocurrido a pedido expreso del Presidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Javier Raidán, vulnera el Reglamento de Concursos que exige trayectoria probada, experiencia en funciones de alzada, solvencia moral y publicaciones doctrinales de alcance nacional.

El Dr. Obligado fue denunciado en varias causas por mal desempeño y prevaricato ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, en expedientes de altísima relevancia institucional como "ESMA", "Los Sauces" y "Hotesur, donde su rol derivó en sobreseimientos controvertidos.

Su exclusión como profesor adjunto de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, tras un dictamen desfavorable de un jurado académico, pone en evidencia la carencia de compromiso con la excelencia docente. Del mismo modo, su trayectoria en el sistema federal escrito y de instrucción judicial no le ha otorgado la experiencia técnica ni la visión institucional necesarias para asesorar en un régimen acusatorio pleno, con audiencias orales y juicios por

jurados, vigente en Chubut desde 2006.

Esta falta de idoneidad, unida a la absoluta opacidad del procedimiento de su inclusión al listado de juristas - realizado sin la publicidad ni la transparencia reglamentarias- mina la confianza pública y empaña la reputación del Consejo de la Magistratura, órgano encargado de designar magistrados.

Por todo ello, el Colegio exige la revocación de dicha designación y la convocatoria a un jurista que cumpla íntegramente los requisitos de solvencia moral, trayectoria académica y experiencia funcional establecidos por el Reglamento de Concursos, en defensa del principio de legalidad y de la independencia judicial.



**COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS**  
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PUERTO MADRYN - PROVINCIA DE CHUBUT  
Miembro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados

Puerto Madryn, 6 de junio de 2025.

NOTA N° 36/2025-CPAPM

Señor Presidente

Consejo de la Magistratura de la Provincia del Chubut

**Dr. Rafael Lucchelli**

S / D

De nuestra consideración:

El Directorio del Colegio Público de Abogados de la Circunscripción Judicial Puerto Madryn se dirige a Ud. en ejercicio de las atribuciones conferidas por los arts. 20 inc. e) y 21 inc. k) de la Ley XIII Nro. 11, que nos imponen el deber de cooperar con la administración de justicia y denunciar ante ese Consejo los hechos que puedan menoscabarla.

Hemos tomado conocimiento que mediante Acordada 2479 del día 5 de febrero de este año el Consejo a su cargo incorporó al listado de juristas destinados a participar en el proceso de selección de magistrados y funcionarios de nuestra provincia al **Dr. Daniel Horacio Obligado**, designándolo mediante resolución administrativa Nro. 32 de fecha 4 de junio para integrar la mesa de evaluación en el concurso tendiente a cubrir el cargo de Juez de Cámara Penal de esta ciudad.

En tal sentido, manifestamos nuestra profunda preocupación por esta designación, por considerar que el Dr. Obligado no reúne las exigencias reglamentarias aplicables. En efecto, el art. 26 del Reglamento de Concursos exige que los juristas invitados posean trayectoria reconocida y solvencia moral, acrediten experiencia en funciones equivalentes o vinculadas al cargo, demuestren docencia universitaria y publicaciones doctrinarias de alcance nacional en la materia respectiva. Estas pautas persiguen garantizar que quienes asesoren al Pleno proyecten imparcialidad, excelencia técnica y una imagen pública incuestionable.

El Dr. Obligado ha sido objeto de múltiples denuncias ante el Consejo de la Magistratura nacional por mal desempeño en su cargo



de juez y prevaricato con motivo de sus polémicas resoluciones en diversas causas que ha tenido bajo tratamiento como integrante del Tribunal Oral Federal Nro. 5, entre las que se destacan las efectuadas por Adolfo Pérez Esquivel, Expte. 479/07, por Hebe Pastor Vda. de Bonafini por su desempeño en la causa N° 18.967/03 "ESMA", por Estela B. Carlotto (Pte. Abuelas de Plaza de Mayo) por permitir la salida de militares condenados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar, por Ricardo López Murphy, Expte. 189/2021, Alfredo Popritkin, Expte. 197/2021, Alberto Assef, Expte. 192/2021, Jorge Enríquez, Expte. 190/2021, Silvina Martínez, Expte. 150/2020, José L. Magioncalda y Juan Fazio (Fundación Apolo), Expte. 195/2022, todas estas relacionadas con las causas Nro. 3732/16 "LOS SAUCES" y Nro. 11.352/14 "HOTESUR", en las cuales el TOF Nro. 5 sobreseyó a la ex presidente Cristina Elisabet Fernández.

También fue denunciado por la causal de mal desempeño por violaciones al Reglamento de Licencias del Poder Judicial, y por su colega Oscar Hergott por presunta alteración de la rotación de autoridades del Tribunal y rendición irregular de gastos de automotor oficiales, Expte. 56/11.

Aun cuando las denuncias disciplinarias contra el Dr. Daniel Obligado hayan sido formalmente desestimadas o bien permanezcan en trámite sin resolución, la reiteración de señalamientos en su contra por mal desempeño genera dudas razonables sobre su parcialidad y afecta la confianza pública, elemento inescindible de la idoneidad.

Destacamos que la idoneidad, en el presente caso, no se reduce a la inexistencia de sanciones firmes: abarca la aptitud técnica y la probidad moral. La coexistencia de varios expedientes disciplinarios abiertos -algunos de reciente impulso y vinculados a causas de alta trascendencia institucional- coloca al juez Obligado en una situación de conflictividad objetiva con un serio cuestionamiento ético y funcional, que desmerece el estándar de confianza que nuestra sociedad tiene derecho a exigir al Consejo de la Magistratura, órgano al cual el pueblo ha delegado la designación de sus magistrados.

Respecto del ejercicio de la docencia, surge de información publicada en distintos medios nacionales, con copias de las



## COLEGIO PÚBLICO DE ABOGADOS

CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DE PUERTO MADRYN - PROVINCIA DE CHUBUT  
Miembro de la Federación Argentina de Colegios de Abogados

actuaciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, que al Dr. Obligado no se le renovó su cargo de profesor adjunto de la asignatura Elementos de derecho Penal y Procesal Penal, del Departamento de Derecho Penal y Criminología, tras una evaluación desfavorable de su desempeño docente, de acuerdo con el dictamen del jurado integrado por Edgardo Donna, Jesús María Silva Sánchez y Guillermo Yacobucci. Pese a los recursos interpuestos por el Dr. Obligado resolución del Consejo Superior de la UBA, ratificó la resolución por la cual se lo excluyó como profesor universitario.

Asimismo, advertimos que la subrepticia incorporación del Dr. Obligado al listado de juristas para la materia penal, se realizó sin la debida transparencia y publicidad reglamentarias. Su designación, por ende, contradice el procedimiento previsto y vulnera el principio de confianza pública que debía preservarse en este concurso.

Por último, cabe señalar, que el art. 26 del Reglamento de Concursos dispone que los juristas invitados deben acreditar "roles vinculados funcionalmente" al cargo a concursar. Ello implica experiencia práctica en tareas equivalentes -o que guarden estrecha analogía institucional- con la función específica de la Cámara Penal dentro del modelo procesal penal vigente en nuestra provincia.

Desde el año 2006, la provincia aplica un Código Procesal Penal de segunda generación, de naturaleza acusatoria, que separa tajantemente la investigación de la función jurisdiccional, sometiendo todas las decisiones relevantes a audiencias orales, públicas y contradictorias. La Cámara Penal provincial actúa como tribunal de alzada que revisa, en audiencias orales, las resoluciones dictadas por jueces penales o por jurados. El Dr. Obligado se desempeña como juez de un órgano de juicio dentro del sistema regulado por el Código Procesal Penal de la Nación de 1992, todavía predominante en la justicia federal, donde la investigación sigue siendo escrita y dirigida por un magistrado instructor. Los Tribunales Orales Federales no son órganos de revisión, por lo que su función difiere de la que ejerce una Cámara Penal provincial.

En el proceso acusatorio chubutense, los camaristas penales supervisan la actividad fiscal, garantizan la vigencia de los principios de oralidad e inmediatez y resuelven recursos sobre la base de registros



---

# **EL PODER JUDICIAL DEL CHUBUT ANTE SU MAYOR DESCREDITO INSTITUCIONAL**

Pronunciamiento del Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn.

El Colegio Público de Abogados de Puerto Madryn manifiesta su profunda preocupación por la grave situación que atraviesa actualmente el Poder Judicial de la Provincia del Chubut, motivada por decisiones adoptadas por el Superior Tribunal de Justicia que han comprometido principios fundamentales como la transparencia, la legalidad, la igualdad ante la ley y el acceso continuo a la justicia.

Se ha conocido la existencia de varias acordadas firmadas por los ministros del STJ que se asignan aumentos salariales significativos, con adicionales por “gastos de investidura”, incluyendo al Procurador General y al Defensor General de la provincia. Estos incrementos, que en algunos casos alcanzarían hasta un 60 % sobre las remuneraciones, han sido implementados sin la debida publicidad y sin respetar el sistema de porcentualidad establecido por la Ley I N.º 301, que garantiza la equidad salarial en toda la estructura judicial. Además, se ha denunciado la utilización de partidas presupuestarias bajo el concepto de “gastos reservados” o “gastos sin discriminar”, sin rendición de cuentas ni control externo, lo cual contraviene los principios de transparencia y responsabilidad en la administración de los recursos públicos.

Estas prácticas, junto con la reiterada designación de funcionarios en cargos jerárquicos sin sustanciación de

antecedentes ni oposición, profundizan el descrédito de la ciudadanía en el Poder Judicial, afectando injustamente a trabajadores, funcionarios y magistrados que sí cumplen con sus funciones y sostienen, con esfuerzo diario, el buen funcionamiento del sistema judicial.

Frente a este conflicto, el Colegio expresa su respeto y solidaridad por el derecho de los trabajadores a reclamar condiciones salariales dignas, que se respete la ley de porcentualidad, y advierte con firmeza que es el Superior Tribunal de Justicia quien debe brindar explicaciones públicas y detalladas sobre las acordadas mencionadas; garantizar la equidad salarial en toda la estructura del Poder Judicial; actuar con austeridad republicana; y proceder conforme a la Constitución Provincial y las leyes en la designación de todos los cargos del Poder Judicial.

En su momento, este Colegio manifestó ante el Poder Ejecutivo su disconformidad -por distintos fundamentos- respecto de las propuestas de designación de determinados candidatos como ministros del Superior Tribunal de Justicia. Por ello, no resulta sorprendente que hoy se observe, como nunca antes, una gestión marcada por el uso discrecional de los recursos, la resistencia a los mecanismos de control y la concentración de beneficios en unos pocos. Esta lógica de funcionamiento ha llegado incluso al extremo de negar a nuestra institución el acceso a información pública vinculada a recientes designaciones internas, desconociendo hasta el momento si las mismas fueron realizadas con la correspondiente sustanciación previa de antecedentes, en abierta contradicción con los principios que deben regir al Poder Judicial en un Estado de Derecho.

Puerto Madryn, 4 de junio de 2025